México necesita una autoridad electoral independiente, profesional y confiable. Para preservarla, debe resistirse la tentación de imponer al árbitro.

ALEJANDRO MADRAZO LAJOUS

Árbitro con consenso

En el origen, fue el consenso. El INE, institución fundacional de nuestra democracia, es mucho más que su Consejo General. Nació de una convicción forjada tras décadas de conflictos y desconfianza entre las fuerzas políticas: la única manera de contar con un árbitro capaz de dar legitimidad a los resultados electorales era poner las elecciones en manos de la ciudadanía. Ni el gobierno ni los partidos tenían entonces, ni tienen hoy, credibilidad suficiente en un país marcado por la simulación y la desconfianza.

En 1996, el gobierno y los partidos políticos entregaron a la ciudadanía la organización de las elecciones. Desde entonces, en cada jornada electoral somos nosotros quienes, seleccionados al azar, nos capacitamos para instalar casillas y garantizar que los votos se cuenten y cuenten. Todos conocemos a alguien cercano que ha sido funcionario de casilla.

Entre elecciones, el Instituto opera mediante un aparato burocrático relativamente pequeño. Para eso existen el Consejo General y sus órganos dependientes: son los custodios del INE entre un ciclo electoral y otro, mientras la ciudadanía vuelve temporalmente a la cotidianidad. Pero legitimar ese aparato y, en particular, a su liderazgo no fue sencillo. La experiencia dejó una lección que conserva vigencia cada vez que algún partido decide ignorarla: el Consejo General solo goza de plena legitimidad cuando quienes compiten por el poder acuerdan su integración por consenso. Cuando una mayoría impone al árbitro electoral, la confianza en la institución inevitablemente se resiente.

¿Qué ocurre cuando la regla se rompe? En 2003, PRI y PAN renovaron el Consejo General del IFE sin incorporar al PRD. La decisión generó un déficit de legitimidad que contribuyó a las tensiones de la elección presidencial de 2006 y obligó, apenas un año después, a una reforma constitucional para renovar nuevamente al órgano y recuperar la confianza mediante el consenso.

Resulta paradójico que Morena, heredero de buena parte de la tradición política del PRD, reprodujera dos décadas después una práctica que durante años denunció: aprovechar su mayoría legislativa para nombrar autoridades electorales sin acuerdos amplios con las demás fuerzas políticas.

El problema no es solo quién encabeza el INE, sino la legitimidad de origen de sus autoridades. Cuando una mayoría designa por sí sola al árbitro electoral, la confianza en su imparcialidad inevitablemente se debilita.

El peligro de aprovechar la crisis. Los escándalos actuales representan un riesgo adicional porque pueden utilizarse para justificar una nueva ofensiva contra la autonomía electoral.

Durante los últimos años hemos visto intentos de desmontar al INE, que van desde amagos de reforma constitucional hasta presiones presupuestales y obstaculización para concretar nombramientos operativos fundamentales. No se necesita un complot. Basta con aprovechar una crisis institucional para alcanzar objetivos que antes encontraron resistencia.

El INE pertenece a la ciudadanía. Lo más importante de nuestra autoridad electoral, aquello que la define, ha estado ausente de la discusión reciente: su naturaleza ciudadana. Aunque cuenta con un servicio profesional permanente, quienes hacen posibles las elecciones son las y los ciudadanos seleccionados al azar para instalar casillas, recibir votos y contarlos. Son nuestras vecinas, familiares y amistades.

Ahí reside la esencia del INE y una de sus principales fuentes de legitimidad. Su prestigio no se construyó en las oficinas de sus consejeros, sino en las casillas y en el trabajo de generaciones de ciudadanos. Por eso, ningún escándalo individual, por grave que sea, debe borrar décadas de construcción institucional.

México necesita una autoridad electoral independiente, profesional y confiable. Para preservarla, los partidos deben resistir la tentación de nombrar autoridades electorales simplemente porque cuentan con los votos para hacerlo.

Las mayorías legislativas cambian; las instituciones democráticas deben permanecer.

Si queremos que nuestra democracia sobreviva, todas las fuerzas políticas deben construir consensos sobre quién encabeza y cómo se integra el árbitro electoral. Porque cuando dejamos de confiar en el árbitro, empezamos a destruir la posibilidad misma de la democracia.

El autor es académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.